

Reflexiones sobre la violencia y alternativas de desarrollo en el medio rural

Dr. Jaime Vásquez Sánchez

**Universidad del Valle
Cali, Colombia**

jaivasqu@univalle.edu.co

INTRODUCCIÓN

Las condiciones de violencia que se viven en el país, en el momento actual, llaman a reflexionar sobre los acontecimientos nuevos presentados a partir del rompimiento de las conversaciones de paz, que por un espacio de tres años mantuvo el gobierno del expresidente Pastrana. Las medidas de fuerza de los sectores en conflicto, muestran un mayor distanciamiento entre los principales actores, e indican el interés de mantenerlas en procura de lograr un mejor posicionamiento para una futura negociación.

La alternativa más favorable para la nación, por lo que esto significa –si éste es el propósito real de las partes- es alcanzar la paz con plena justicia social. El dilema se centra en si el Estado está dispuesto a apostarle al desarrollo territorial en el medio rural y a realizar transformaciones profundas en la vida nacional, particularmente en el campo, lo cual necesariamente parte, no solo de realizar una reforma agraria integral de corte democrático, que haga realidad las aspiraciones de importantes sectores del campesinado despojados de la tierra, y de los desplazados por el fenómeno de la violencia, sino de invertir en infraestructura en las áreas rurales en diversos órdenes, que permita estimular y apoyar, mediante la modernización, la economía de este sector en crisis, así como dar salidas al creciente problema urbano de los desplazados por la violencia en un importante número de ciudades.

Se trata, entonces, no de un simple diálogo que conlleve a “garantizar el cese de las operaciones insurgentes”, sino de apostarle a comenzar a construir un nuevo país, en el que todos los colombianos vivamos con dignidad. Únicamente un proceso de paz sólido y duradero servirá de garantía para poder implementar las políticas adecuadas de ordenamiento territorial, empresa que debe insistir en los propósitos de alcanzar un mayor equilibrio en el desarrollo armónico de las regiones. Se considera que la paz duradera beneficia a todos los sectores de la vida rural, e incluso urbana, y no solo a las fuerzas del Estado y la clase dirigente del mismo, sino a los grandes propietarios de la tierra, la agroindustria nacional, los variados tipos de ganadería; a medianos y pequeños propietarios de parcelas, a las diversas organizaciones sociales en el campo,

así como a todos los sectores de la economía: turismo, recursos hidroenergéticos, mineros, medio ambiente, inversión extranjera en el campo, y sociedad en general.

Ahora bien, ¿de dónde partimos? En uno de los tantos *grafittis* que usualmente se escriben en las paredes de nuestro país se lee: “¿Y quién se queda con las tierras de los desplazados?”. Éste es un interrogante, al que poca atención le prestamos, pues como científicos sociales, la preocupación se inclina por señalar sólo el proceso creciente del desplazamiento forzado a que se ve sometido cada vez un mayor número de familias pobres en distintos puntos de la geografía nacional.

Aisladamente, un estudio de Planeación Nacional, realizado en los últimos años, da algunas pistas sobre quiénes se “quedan precisamente con dichas tierras”, y que se benefician como resultado de su propia participación en la cruda violencia colombiana, en lo que ha sido llamado por los técnicos de dicha oficina, como una “Contrarreforma agraria”, impuesta por el narcotráfico bajo la protección del paramilitarismo. Este estudio, minimiza el sesgo político que puede tener tal afirmación, muy propio de los análisis que se hacen sobre el particular. Dicha contrarreforma se manifiesta en que *“entre 1980 y 1995 el narcotráfico ha realizado compras de tierras en el 37% de los municipios del país. Esta situación ha contribuido a elevar los niveles de concentración de la propiedad; ha desplazado a los campesinos de los frentes de colonización a las ciudades; ha sobrevalorado las tierras; ha financiado la contrainsurgencia; ha forzado la destinación de las mejores tierras del país a la ganadería extensiva, en perjuicio de la agricultura y de los bosques; y ha deteriorado el escaso liderazgo social en las regiones afectadas”*¹ Ante esta grave situación, el gobierno de Uribe Vélez propuso inicialmente tomar acciones sobre 35.000 ha de tierras que pueden ser objeto de expropiación al narcotráfico para realizar “medidas de reforma agraria”, las que ha ampliado a octubre de 2004, a un promedio de 150.000 ha.

Quizá son pocos los que desconocen que el problema de la violencia rural tiene su origen en el desorden estructural relacionado con las presiones históricas ejercidas sobre los espacios rurales; y a la ausencia de una profunda reforma agraria democrática que transforme de raíz la propiedad actual de la tierra. Esto lo han comprendido muy bien los actores reales del conflicto: guerrillas, paramilitares, Ejército, narcotráfico, Estado y clase dirigente del país, ninguno de los cuales

parece estar dispuesto a ceder gratuitamente, por el contrario, muestran un endurecimiento en sus posiciones de fuerza, que impiden una salida pacífica al conflicto armado surgido hace algunas décadas².

En efecto, cuando el Codhes, destacada organización no gubernamental, revela en sus informes el recrudecimiento del desplazamiento forzado de la población, o los anuncios de la presencia de los actores del conflicto ampliando su radio de acción, nos está alertando que es urgente, para el Estado y para la sociedad en su conjunto, tomar cartas en el asunto, si no queremos que se intensifique la violencia.

Partiendo de estos presupuestos, es natural que cuando en una confrontación entre dos fuerzas (guerrilla y Ejército), ninguna de ellas está en posibilidades de derrotar a su oponente, es claro que la única alternativa es la negociación. Por lo tanto, los diálogos tienen que brindar salidas dignas para quienes participan en ella. No hay otro camino diferente: ni el del aplastamiento de las fuerzas insurgentes por parte del Estado con su Ejército, que cuenta con el apoyo cada vez más abierto de los Estados Unidos; ni la derrota definitiva del Establecimiento por parte de la guerrilla, por mucho que, luchen por ampliar su espacio de acción, y resistan en esta fase la “arremetida” de las Fuerzas del Estado.

La negociación y la salida pacífica al conflicto siempre estarán al orden del día. No tienen razón quienes apuestan a que la alternativa es endurecer las políticas del Estado en el orden militar, con la esperanza de que con el apoyo de los Estados Unidos – cada vez más envalentonado en su lucha contra el terrorismo -, se ponga el punto final al problema interno por la “vía de tierra arrasada”; tampoco quienes consideran que ha llegado el momento de crear las condiciones para promover la insurrección popular en las grandes urbes, tal como quedó explícito en el mensaje de la guerrilla, el día que se logró el intercambio humanitario de soldados y policías retenidos, por presos políticos e insurgentes, al pronunciar la sentencia *“Allá nos vemos; aquí no van a quedar si no dantas, chigüiros y ratas...nos pillamos en la ciudad...”*³.

Algunos podrían decir que la primera opción es una disyuntiva, pues ha quedado demostrado que la guerrilla no es invencible, que lo que se necesita es una mayor autoridad del Estado, que la

población está dispuesta a jugársela por sus Fuerzas Armadas, que los Estados Unidos definitivamente ya tomaron partido en el asunto⁴, tesis que no es nueva, mas sin embargo, muy cierta, al hacer claro su propósito de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, cuya variante criolla es el llamado “narcoterrorismo”, solicitando la extradición de algunos miembros de la cúpula de las FARC. Por lo tanto, dicen quienes apoyan esta tesis, que, llegó el momento de darles la estocada final.

Ésta, desde luego, es una opción, que no compartimos, precisamente porque conocemos la realidad nacional, y estamos convencidos que de jugársela por este camino representará incalculables costos a la nación en todos los órdenes, para obtener finalmente una victoria pírrica que dejaría secuelas muy difíciles de sortear en el futuro.

Igualmente, tampoco consideramos la segunda opción como una salida. Hay que desconocer las características del momento actual, para pensar que la alternativa es alcanzar el poder por medio de una insurrección “acompañada por las grandes masas populares”, que anhelan cambiar de raíz las estructuras imperantes, para dar paso a una nueva organización estatal que rompa definitivamente con su pasado y que desde el poder, excluyentemente, solucione los problemas de los sectores populares. Se desconoce también que estamos en otra etapa histórica, y que los Estados Unidos, una vez vean amenazados sus intereses, participarán en lo militar más abiertamente, para “salvar su llamada democracia occidental”, pues se estaría atentando contra la propiedad privada, la libertad y desde luego, su paranoica “seguridad interna”.

Definitivamente tomamos posición por una salida negociada al conflicto, en cuyas conversaciones esté dispuesta la clase dirigente del país a ceder en distintos órdenes, de tal manera que se creen las condiciones para construir otro Estado, que desde luego no va a ser el socialista, ni un Estado pseudo-neutral-capitalista maquillado, que mantendría en esencia las cosas tal como están. Se trata más vale de construir un Estado profundamente democrático, cuyas políticas permitan mejorar las condiciones reales de vida de sectores de la clase media que se van empobreciendo y la gran masa marginada que va ampliando la franja de la pauperización. Bajo estos presupuestos, desde la academia, podemos realizar los geógrafos un análisis de la situación y mostrar algunas alternativas para la formulación de un nuevo país.

Algunas reflexiones sobre el rompimiento

En el pasado reciente se presentó una situación que no debe repetirse en el futuro. Se trata del juego, en alto grado irresponsable del gobierno, de poner al orden del día la realización de diálogos de paz, con el objetivo de dar un golpe electoral, tal como lo hizo el ex presidente Pastrana Arango⁵. Todos conocimos que su administración quiso mostrar un interés por la paz sin estar debidamente preparada para ello. Primó, ante todo, el factor político de generar un golpe de opinión para rebasar a su contendor de turno, al candidato Serpa, y no un propósito serio que creara las bases para una salida pacífica al conflicto. En ese sentido, fueron persistentes las críticas de la clase dirigente al proceso, bajo el planteamiento de “un mal empleo de la zona de distensión” por el lado de las FARC.

Como resultado de esta improvisación, se facilitó parte del territorio nacional para que sirviera de escenario de unas conversaciones, sobre las que no se tenía planificada una política estratégica, que generara confianza entre los distintos sectores de opinión, para un respaldo real al proceso. Se desconoció, además, que la contraparte había acumulado amplia experiencia en la negociación como resultado de diálogos anteriores⁶, en los que demostró, junto al reciente, que no hay grandes vacíos, y que, antes por el contrario, mantiene coherencia en lo que ha venido planteando. Del mismo modo, sabe muy bien que las negociaciones se realizan para obtener cambios favorables, de lo contrario no tienen razón de ser.

Desconoció el presidente Pastrana aquellas palabras expresadas, hace ya un siglo; por el connotado zoólogo y geógrafo alemán Friedrich Ratzel, relacionadas con el papel del Estado con respecto al territorio: *“Un pueblo retrocede mientras pierde terreno. Puede tener menos ciudadanos, y mantener sin embargo sólidamente el territorio en el que están sus recursos de vida. Pero cuando su terreno disminuye es, en general, el principio del fin”*⁷.

Aunque en este planteamiento se hace referencia a la necesidad de defender el territorio como algo inherente a la soberanía del Estado, y las preocupaciones surgen por las presiones que desde el exterior ejercen los países “enemigos” sobre las cuales no está permitido renunciar. De todas

maneras, proporcionar parte del territorio para realizar conversaciones sin condiciones previas claramente definidas y sin ningún control por parte del Estado de lo que en él pueda suceder, significa, de entrada, ceder en los propósitos de una negociación.

Sobre el particular, tampoco es correcto respaldar a quienes a ultranza quisieron mostrar que se había cedido a la guerrilla en aspectos ligados a la soberanía, renunciando el Estado a “una porción de su territorio”, para que fuera “administrado por los terroristas”. Una respuesta a esta concepción fue la lección que les dio las FARC cuando, en la dinámica de rompimiento de las conversaciones, manifestó que estaba dispuesta a cumplir con los compromisos adquiridos y que desocupaba las cabeceras municipales de las localidades que habían servido de escenario para los diálogos, tal como en efecto lo hicieron, no así el área rural pues éstos son territorios donde históricamente han actuado, y en los que ejercen en gran medida el dominio territorial.

Diálogos serios de paz son aquellos en los que el gobierno está dispuesto a asumir compromisos como política de Estado, de tal manera que se garantice una continuidad en el proceso, independientemente del presidente de turno y de los intereses políticos de los funcionarios del momento. Al igual, los gobiernos no pueden improvisar en esta materia, aunque en muchos casos se quiera mostrar como un proceso único. Los hechos demuestran que de nuevo la insurgencia mantuvo su palabra en lo que respecta a su decisión de salvaguardar el diálogo hasta el último momento, y que el rompimiento no saldría de su parte. Para ello planteó “*nunca levantarse primero de la mesa, a no ser que sobre ella cayeran bombas de la otra parte*”, y en efecto, es claro que dichas conversaciones fueron interrumpidas unilateralmente por el gobierno, quien decidió conceder un plazo para que la fuerza insurgente entregara la zona de despeje.

De múltiples maneras se ha reflexionado sobre cómo se desarrolló esta experiencia, durante los tres años que duraron las conversaciones abiertas, entre los principales actores del conflicto; algunas insisten en la falta de compromisos por las partes, por cuanto ambas contaban con *planes B*, que fueron aplicando dosificadamente de acuerdo con el balance que internamente hacían sobre los avances reales, las limitaciones y los temores propios de unos diálogos en donde siempre ha existido la desconfianza por la misma naturaleza histórica de experiencias anteriores.

La existencia de dichos planes estuvo precedida y desarrollada simultáneamente por una serie de actos de provocación que fueron diezmando la credibilidad en un proceso en el cual la clase dominante no estaba convencida de la idoneidad en su ejecución, lo que hizo más complicadas las negociaciones. Estos actos, muy determinantes, fueron creando dudas en la población sobre las bondades de las conversaciones, debido en gran parte al deliberado e irresponsable manejo de los medios de comunicación, interesados en generar más impacto, que en construir durante el proceso.

Unido a lo anterior, efectuar las conversaciones de paz en medio de la confrontación, quedando claro que el único escenario donde no podía haber combates era en la zona de despeje, hizo que en cada acción armada llevada a cabo por la insurgencia en cualquier punto del país, el alto mando militar y sus subalternos, señalaran de inmediato al enemigo, por los medios de información, empleando los más diversos calificativos – terroristas, narcoguerrilleros, secuestradores, bandidos, etc.-, epítetos con los que sólo dejaban ver su posición de fondo sobre el proceso de negociación⁸.

El problema de la existencia de *planes B* (o planes paralelos a los que se discutían en la Mesa de Negociación) a nuestro parecer, no representa el origen real del rompimiento; más vale era un pretexto de las partes para mostrar a la opinión pública cuál contendor fue el causante de la ruptura. La presencia de estos planes es el resultado previsible en cualquier tipo de diálogo, en el que no existe plena confianza en la profundización de las conversaciones y, por lo tanto, los actores principales del conflicto se preparan para momentos en los que se agote la vía de negociación, y haya que esperar otras oportunidades más ventajosas para alcanzar sus propósitos de fondo. De allí que no les asiste la razón **a uno y a otro**, cuando se habla de la implementación de estos planes.

No tenían la razón el gobierno, el Ejército oficial, la clase dominante y sus medios de desinformación, cuando decían que las FARC estaban empleando la zona de despeje para ocultar los retenidos y secuestrados y causar todo tipo de desmanes; lo que indicaba que no existía de parte de ellas sinceridad en sus propósitos de paz, pues dichas acciones resultaban inexplicables y contradictorias con el espíritu que mostraban en la Mesa de Negociación. Así mismo, tampoco

eran aceptables los reclamos de la guerrilla, que consideraba que la implementación del Plan Colombia apuntaba únicamente a intensificar el conflicto, pues los verdaderos objetivos del gobierno, con el beneplácito de los Estados Unidos, eran crear las condiciones para acabar con la insurgencia; que la fumigación de los cultivos ilícitos no era más que un pretexto para diezmar a la organización guerrillera y obligarla a negociar en medio de una derrota militar; que la intensificación de los vuelos de inteligencia sobre la zona de despeje buscaban detectar la ubicación de sus principales dirigentes, etc.

¿Quiere decir esto que las anteriores acciones no se estaban llevando a feliz término de lado y lado? No, en efecto, mucho de esto se llevaba a cabo. Lo que se trata de mostrar aquí es que en medio del avance de las conversaciones, ambos realizaban paralelamente sus proyectos que les permitían tener un mejor posicionamiento en la Mesa de Negociación, apoyados por la falta de unas reglas claras de juego. El problema de las negociaciones consistió, como era lógico, en que las partes tendieron a mostrarse cada vez más duras, para lograr obtener sus mejores dividendos.

No podemos esperar que la guerrilla, en un proceso de paz, se debilite. Nadie negocia para salir perdiendo al final, reduciendo su influencia y sus espacios; cualquier organización –legal o ilegal - lo que busca es un fortalecimiento, que le permita ganar opinión, y mejorar su proyección política entre la población. Al gobierno, por su parte, le interesa, ante todo, crear condiciones de estabilidad social y de gobernabilidad en el país, que le garanticen sacar adelante sus proyectos económicos políticos y sociales, por lo tanto, negocia para que se genere una paz que reduzca en gran proporción la creciente violencia y haga viable la política del Estado. Y, desde luego, al ser un gobierno no neutral en materia económica, hace todos los esfuerzos por garantizar los privilegios de la clase dominante, de allí que poco interés tenga en la realización de las transformaciones económicas de fondo que garanticen otras condiciones de vida a la cada vez mayor franja de empobrecidos en el país. En estas circunstancias, cuando no existe confianza entre las partes es legítimo recurrir a otros propósitos que les garanticen, en un caso de rompimiento, por lo menos conservar lo que se tiene hasta ese momento. Desde luego, estas suspicacias no son infundadas, son el resultado de la realidad concreta e histórica del país y las concebimos como las explicaciones más claras que muestran cómo un proceso de paz en nuestro medio es algo muy complejo de cristalizar, pues debe existir una voluntad política sincera de las

partes, cargada en alto grado de disposición para ceder, no solo parte de lo que se tiene, sino de lo que aspira a obtener.

De allí que el proceso de paz haya ido generando “síntomas de debilitamiento, pues, alternativamente, gobierno y guerrilla buscaron sus opciones paralelas a las conversaciones de paz; la guerrilla prosiguió con los enfrentamientos en las otras regiones del país, con acciones que, en muchos casos, afectan directamente a la población civil, mientras el gobierno ha promovido su Plan Colombia que sin duda escalará la guerra bajo el pretexto de combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico, circunstancia que algunos observadores la catalogan como la posible vietnamización del conflicto interno, pues es evidente la cada vez mayor injerencia norteamericana en el asunto”⁹

En este contexto, es evidente que materializar un proceso de esta naturaleza, significa, de parte del Estado, estar en disposición de realizar las profundas transformaciones económicas y políticas que requiere la sociedad, para elevar la calidad de vida de los habitantes y, de parte de las FARC, crear las condiciones para un proceso de desmovilización que conlleve a dejar las armas y promueva su participación en un nuevo escenario como agrupación política con plenas garantías, que defienda las conquistas obtenidas como resultado del proceso.

Momentos posteriores al rompimiento de las negociaciones del Caguán

No apuntamos a realizar en este aparte, un análisis en detalle sobre la situación que vivimos en la presente etapa, sino, señalar algunos aspectos que muestran el retroceso que significa haberse roto las conversaciones de paz. No pocos politólogos y especialistas han dedicado parte de sus reflexiones a “lo que se viene”.

Culminadas las conversaciones, es lógico que quien más ha perdido en esta etapa es la sociedad, que en su conjunto sólo aspira a que en el país se den condiciones de confianza, para vivir en una paz duradera. Vienen ganando hasta el momento los sectores militaristas, que han deseado una derrota por esta vía del contrincante, y el sector más retrasado y de derecha de la clase dominante que ha demostrado no estar dispuesta a ceder parte de sus privilegios económicos y políticos,

obtenidos en no pocos casos como resultado de un supuesto “trabajo mancomunado”¹⁰; incluso sectores de los gremios que de alguna manera han acompañado el proceso, pero cuya posición no muestra nada sustancial referente a los cambios, pues sus propuestas son vacías al expresar que *“la comunidad empresarial contribuirá eficazmente al logro de la paz apoyando las reformas institucionales requeridas para atacar la exclusión, la pobreza y las desigualdades, y para garantizar el respeto a los derechos humanos y de convivencia; ofreciendo soluciones para los problemas propios del posconflicto; y concitando a la sociedad para que haga de la paz un gran propósito nacional”*¹¹.

Siguen ganando, además de los conocidos negociantes de armas -nacionales y extranjeros-, aquellos que se benefician del desplazamiento forzado de centenares de miles de campesinos cuyo volumen en los últimos años superó ya la barrera de los 3 millones de personas, al apoderarse de sus tierras y que, en beneficio de inventario, fortalecen la contrarreforma agraria en el campo; al tiempo que sale perdiendo, la población urbana, que ve cómo se acelera más el deterioro de sus condiciones de vida, al tener las ciudades que soportar la presión sobre los espacios urbanos de los desplazados, debido a la proliferación de los tugurios, a las mayores condiciones de insalubridad, a la intensificación de la violencia urbana, al incremento de la economía sub-subnormal y, en general, a las malas condiciones de seguridad ciudadana. En pocas palabras, se puede concluir que quienes más se benefician del rompimiento son los interesados en mantener el “statu quo”, particularmente para conservar sus privilegios, a costa de mayores índices de pobreza de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Rotas las negociaciones, se preveía que las acciones militares se intensificarían sostenidamente bajo la nueva administración, pues los bandos en conflicto no tenían referentes que los obligara de alguna manera a guardar comportamientos acordes con un diálogo, que, así algunos lo consideraran como formal, todavía se mantenía en la Mesa del Caguán. La exigencia inmediata, por parte de la guerrilla, de la renuncia de los alcaldes elegidos, que buscaba afectar la gobernabilidad de los municipios, indicaba una de las opciones que se trazaba para dificultar al máximo la dirección política en algunos departamentos del país, esto, desde luego, generaría un caos sin precedentes en caso de que los alcaldes, cedieran a los propósitos del grupo insurgente.

Sin embargo, no hubo tal intensificación, salvo los esporádicos enfrentamientos en el área rural, el hostigamiento inicial en algunas ciudades, y el tradicional sabotaje a la infraestructura económica, por el lado de la guerrilla. De la contraparte, el trabajo dispendioso, por controlar parte del territorio en las deprimidas Comunas, sobre todo en Medellín, que algunos magnanimizaron; el continuo su fortalecimiento de las fuerzas armadas, con nuevos recursos económicos y un moderno armamento; la formación abierta de las redes de informantes, paralela a la creación de las primeras “zonas de rehabilitación” en algunas partes del país y el limitado balance de los Consejos Comunitarios, en materia de orden público.

Encontramos si a un gobierno a la ofensiva en sus propósitos de guerra, al diseñar y culminar su primera fase del Plan Patriota, la nueva denominación del Plan Colombia, que se encuentra ahora en su segunda etapa, con operativos en amplios territorios del Oriente, en donde, según el informe del LAWG y otras instituciones, se establece que *“desde enero de 2004, entre 15.000 y 20.000 militares colombianos, muchos de ellos dispuestos en unidades móviles que acaban de crearse con el asesoramiento y entrenamiento de EU, han estado operando en el sur de Colombia, Caquetá, Meta y Guaviare, bastión por mucho tiempo de las FARC”*¹². Este fino recrudecimiento de la confrontación, no tiene una respuesta clara a la solicitud promovida por la sociedad, de darle salida a un intercambio o canje humanitario, que permita la liberación de los secuestrados políticos y de oficiales y suboficiales de la fuerza pública –23 políticos y 47 oficiales-, que tienen en su poder las FARC, por guerrilleros que cumplen sus penas en las cárceles del país.

En lo que respecta a la guerrilla, se observa un inesperado cambio, que, según Rangel, corresponde a ser *“el mismo de hace cuarenta años”*, que consiste en dejar pasar el tiempo, esperar a que el gobierno se desgaste, realizar sus acciones en las ciudades con el menor costo posible, y sobre todo *“hacer creer al adversario que están golpeados y derrotados, que perdieron capacidad de respuesta frente a las acciones del Estado, que ya cedieron a la contraparte la iniciativa, y que su libertad de maniobra quedó anulada. Así la autocomplacencia que pueden provocar en el otro bando, el exceso de confianza y la vana ilusión de triunfo, podrían resultar fatales.”*¹³

Esto no quiere decir que su actitud sea el reflejo de la pasividad. Más bien, estudian las condiciones en que deben actuar en medio de un gobierno que mantiene su credibilidad dentro de la población, y que de manera decidida busca crear otra forma de relacionarse con ella, para garantizar situaciones nuevas y distintas en materia de seguridad y orden público, que le permita llegar poco a poco a aquellas regiones donde ha sido tradicionalmente débil la presencia del Estado.

Siguiendo una secuencia de lo acontecido en Colombia, es importante analizar un aspecto como el casi total “cese de actividades” de los grupos paramilitares, como resultado de las propias contradicciones internas que se han venido gestando, entre otras cosas debido a la exigencia de extradición de sus líderes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; los roces internos por los métodos utilizados en algunos lugares, y las discusiones entre sus integrantes de acogerse a negociaciones con el gobierno a partir de un cese de acciones militares. Sobre el particular, se debe reflexionar un poco sobre la promovida “reincorporación” de los paramilitares a la vida civil. Extraña la forma rápida como sus integrantes se han apresurado a pronunciarse a favor de realizar conversaciones de paz, cuando siempre habían sostenido que una eventual desmovilización sólo se haría en la medida en que desapareciera la acción militar de la guerrilla. Sin duda, en esta decisión pesa la presión de los EU sobre su dirigencia, país que busca, no tanto hacer justicia por las implicaciones de éstos en el narcotráfico, sino presionar igualmente a la cúpula de las FARC, de tal manera que, con similar sentencia, se debiliten desde “lo alto”.

Una inquietud central esta relacionada con el futuro inmediato de los “paras”, sobre la cual se tejen preocupantes versiones: ¿se incorporarán a la propuesta de la creación de los programas de “soldados campesinos”, que dice el gobierno?, ¿Integrarán la red de informantes del Ejército para sus operaciones contrainsurgentes? ¿Serán el “ejército de reserva en la sombra” de narcotraficantes y grandes latifundistas que se han beneficiado de la contrarreforma agraria realizada en el país?

De otro lado, la promesa de las AUC de no volver a realizar operaciones contra la población civil, se enmarca con la propuesta de un “cese de hostilidades” con el gobierno, que cubre el 95% de sus integrantes; dicho paso se apoya en que el Estado ha demostrado estar en capacidad de

garantizar su presencia en aquellas zonas donde anteriormente no tenía la consolidación sobre el territorio. Esta rápida decisión es el resultado de las contradicciones propias de una organización que al tiempo de carecer de una dirección jerarquizada, cuenta con bloques que tienen una gran autonomía operacional; su cambio se ve estimulado por las posibilidades de lograr una salida a su propia crisis, en el contexto de un gobierno caracterizado por su "mano dura", que conoce muy bien su accionar. De allí que, tal como lo afirma Rojas, *"La situación interna de las AUC llevaba a que la mejor opción que les quedaba era negociar con el único gobierno que está dispuesto a asumir los costos políticos y diplomáticos de negociar con ellos"*¹⁴. Incluso todo esto ha sido conocido ya tiempo; por su dirigencia que percibe como *"sectores del Establecimiento que veían con buenos ojos, o que por lo menos se hacían los de la vista gorda frente al fenómeno paramilitar, comenzaron a marcar cierta distancia ahora que los Estados Unidos rotulaba a las AUC como terroristas"*.¹⁵

Siendo cierto lo anterior, es necesario, profundizar al respecto, pues se sabe que en las áreas de su influencia no solo se siembran cultivos ilícitos, sino que la ocupación armada de los territorios permite garantizar la "propiedad" sobre la tierra al brindar protección a los nuevos terratenientes ligados al narcotráfico, que han consolidado su propiedad sobre las "nuevas tierras".

Finalizando este aspecto, las conversaciones apuntan a promover su paulatina desmovilización a cambio, de obtener garantías para que sus jefes no sean extraditados por sus vínculos con el narcotráfico. De allí en que Santafé de Ralito no se estén negociando cambios de ninguna índole, más bien, se trata de mantener la impunidad. Al igual, queda por analizar, el ajedrez del creciente proceso de paramilitarización del país, pues se vislumbran nuevas áreas estilo Santafé de Ralito. Otra cosa sucede en lo que respecta al tratamiento con la insurgencia, pues mientras el gobierno intensifica sus operativos contra las FARC en el Oriente del país, con su promocionada *II fase del Plan Patriota*, para diezmarla militarmente, ha intentado presionar con el "As en la mano", la extradición a los EU del más alto dirigente en su poder, "Simón Trinidad" capturado en el Ecuador y lo ha enviado el último día del año de 2004, ubicándolo en el mismo rango del narcotraficante del cartel de Cali, Rodríguez Orejuela, tratando de desvirtuar la lucha política de esta organización guerrillera, al tiempo que ahogando definitivamente las posibilidades de un intercambio humanitario con las FARC. Así mismo, mantiene débiles contactos con el ELN, sin

reconocer de hecho que existe un conflicto interno que exige cambios de fondo. Esto se desprende del cruce de cartas entre esta última organización y el Comisionado de Paz, en las que cada cual expone sus puntos de vista sobre el conflicto¹⁶.

Algunos problemas de desterritorialización

El fenómeno de la violencia superó sus características primarias que representaban, la confrontación entre los grupos insurgentes y las fuerzas armadas oficiales en lugares geográficamente recónditos. Las condiciones cambiaron en la medida en que aparecieron los paramilitares, agravando los escenarios de violencia; en este sentido, hay que resaltar cómo *"Los nuevos actores sociales del conflicto se comenzaron a vislumbrar al ligarse grupos de narcotraficantes con sectores de derecha del gremio de la Federación de Ganaderos (Fedegan) para formar grupos paramilitares, en los que participaron, como lo han denunciado distintas ONGs, algunos militares activos y en retiro"*¹⁷. Su complejidad ha agudizado los problemas de desterritorialización, afectando no solo a sus primigenios habitantes, sino a amplios sectores de la sociedad.

El fortalecimiento de estos grupos, tanto en magnitud como en expansión a nuevas áreas, mostró la disposición de defender el territorio donde se creaban y posesionaban, para luego ampliar su radio de acción bajo el pretexto de liberar los espacios dominados por la guerrilla. La guerra contrainsurgente paso, entonces, de su tradicional confrontación entre la guerrilla con el Ejército, a convertirse, en una guerra en la que también estaban presentes los paramilitares, que se fueron consolidando como una fuerza irregular que contaba con simpatía del Ejército, y sentía que podía actuar "con las manos libres", para erradicar todo aquello que significara apoyo a la subversión. El apoyo al paramilitarismo era evidente igual, dentro de algunos círculos de los gobiernos de turno, de tal manera que, *"...siguió con su estrategia de usurpar funciones propias del Estado, aprovechando la tolerancia o pasividad de las autoridades y de algunos sectores de la sociedad. ... (hasta) ir penetrando las estructuras estatales como parte de su estrategia, y en varias regiones, constituirse en una especie de Estado paralelo..."*¹⁸

El afianzamiento de los actores los llevó a enfrentamientos por consolidar corredores estratégicos para garantizar el dominio territorial. A la guerra se le incorporó una "nueva modalidad", el "trabajo sucio"; ya no se trataba de acciones militares entre los bandos, sino la guerra sucia de los 'Paras' contra la población civil que supuestamente apoyaba o simpatizaba con la guerrilla, entrándose a la fase de las masacres, con sus consecuencias de desplazamiento forzado. Esta perversa situación ha conllevado al éxodo de miles de familias campesinas en muchas partes del país; cuyo seguimiento hace la ONG del Codhes¹⁹, al igual que la entidad oficial Red de Solidaridad.

La guerrilla inicialmente buscó el enfrentamiento abierto con los paras generándole bajas en diversos combates; los medios de información los registraban, mientras la fuerza pública aparecía expectante a los acontecimientos y sólo entraba en el teatro de las operaciones cuando prácticamente habían culminado. En estas circunstancias, las acciones punitivas que en otras épocas las desarrollaba el Ejército, ahora entraban a descansar en los hombros de los paramilitares, limpiando de esta manera, los primeros, "su imagen" ante la nación²⁰.

Como resultado de las distintas maniobras, se pone de manifiesto algo que poco se ha estudiado y, que hacerlo implica sus riesgos: ¿Cómo ha repercutido en la economía local y regional la expansión del movimiento insurgente? ¿Cuál es el grado de paralización productiva de las actividades económicas donde la guerrilla ejerce influencia? ¿Qué espacios de la geografía nacional han pasado a manos de las AUC? ¿Cuáles son los sitios precisos donde se ha presentado el acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes ligados al narcotráfico y a la ganadería extensiva?

Estos últimos, desde luego existen puntualmente, pues los estudios técnicos de Planeación Nacional nos confirman que entre 4 y 5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, han quedado en poder de los narcotraficantes. No obstante, solo se reseñan datos globales sin especificar en qué lugares concretos se ha registrado esta acumulación de tierras. Las inocuas reformas agrarias decretadas por distintos gobiernos en las décadas precedentes, muestran como antes de solucionarse el problema de la tenencia de la tierra, éste se venía agudizando por la vía de la violencia paramilitar, contribuyendo a profundizar la desterritorialización.

Es claro que, el problema de la desterritorialización no hace referencia a la pérdida de tierra por parte de las comunidades rurales, así el despojo signifique la carencia del sustrato básico del campesino sobre el que construye sus relaciones culturales; por lo cual, este desalojo viene a ser circunstancial: se trata más vale de ver cómo el campesino ha ido perdiendo aceleradamente el control sobre los procesos productivos, dependiendo cada vez más de los factores exógenos que regulan el mercado, por lo que, ha estado subutilizando no solo su propia iniciativa productiva, sino el complejo de lo cultural que históricamente le dio cohesión como grupo social muy ligado a sus espacios, donde no solo desarrollaba sus relaciones económicas, sino de diversa índole y que le proporcionaban la identidad que lo diferenciaba de otros sectores productivos.

Estos problemas no son nuevos, comenzaron en el país desde el momento en que se consolidaron los procesos de colonización, como alternativa a las presiones de los campesinos sedientos de tierras, quienes, una vez obtenidas sus parcelas del ente gubernamental, y puestas a producir, fueron víctimas de las dinámicas del crecimiento del latifundio que, como “una relación de producción fue corriendo la cerca, sobre las parcelas campesinas”, obligándolos a abandonar sus tierras. Se despojaba así a los campesinos con todo lo que esto implicaba, quienes optaban por emigrar a las ciudades, vender sus pequeñas unidades productivas ante presiones económicas, o algunos pocos a “enmontarse” para defenderse de la agresión.

De allí que desarraigados de su medio, en todos los sentidos, no pudieron construir relaciones fuertes en sus nuevos espacios, ni conservar sus rasgos culturales tradicionales de sus lugares de origen, pues el despojo de nuevo hacía presencia, bien fuese por las acciones de violencia o, en “el mejor de los casos”, por los procesos de mecanización, o de modernización del campo, que fueron liquidando sus relaciones tradicionales de explotación de la tierra, sus vínculos entre la producción agrícola y su sistema de alimentación y, con ello, todo su mundo cultural. Se distanciaba a los campesinos, sector social que, después de los indígenas, se ha caracterizado por ser el grupo humano con mayor capacidad de aprehensión a sus espacios, precisamente por el papel que juega en el proceso productivo, y su dualidad de propietario-trabajador, generándole toda una calamidad social. Por un lado, se excluía de la propiedad de la tierra y, por el otro, se le condenaba, en la mayor parte de los casos, a emigrar a la ciudad, un espacio vivencial hostil a su formación, pues *“las circunstancias en las que estas personas deben reconstruir sus proyectos de*

vida, denotan un nivel de precariedad mucho más alto que aquel que se revela en otros grupos poblacionales vulnerables. Sin desconocer las graves consecuencias que implica el desplazamiento forzado para aquellos grupos de población que logran permanecer en el medio rural disperso”,²¹ para, en últimas, convertirse en mano de obra barata, y fortalecer los cordones de miseria de las grandes urbes en crecimiento del país.

Aunque la anterior es una de las dificultades más evidentes, otra consecuencia de la desterritorialización, una vez rota la relación comunidades rurales – territorio, es el uso diferenciado del suelo, que posteriormente se le dio a los terrenos expoliados, pues los resultados económicos no fueron en todas partes los mismos: mientras que en muchos lugares, durante el período de la “Violencia”, se “amasaron” grandes extensiones de tierra en manos de prósperos agroindustriales, como los del sector cañero en el valle geográfico del río Cauca, los del sector arrocero en el Tolima grande, y más recientemente, importantes áreas en las haciendas ganaderas de la Costa Atlántica, o en las plataneras de la próspera región bananera del Urabá chocoano - antioqueño, en amplias regiones se vino a consolidar un latifundio ocioso, improductivo, que está a la espera de valorizar sus propiedades, y que debe ser objeto, en primer lugar, de medidas de reforma agraria.

Esta persistencia de la violencia, unida a las tendencias globalizadoras, cada vez más fuertes, ha profundizado la desterritorialización en el medio rural. A diferencia de otros países de la región, este fenómeno ha sido mucho más agudo y en muchos casos “salvaje”; presentándose una singular ruptura entre la agricultura y el territorio. Las comunidades rurales que “sentían” todo el proceso productivo en el tiempo y, con las limitaciones tecnológicas lo trataban de conservar espacialmente, han visto como las faenas agrícolas van diluyéndose, perdiendo su carácter autóctono y desvertebrándose su forma organizativa y de distribución en el territorio a escala local y regional.

La violencia, con el despojo de hecho de la tierra al campesino, no ha permitido que en muchas áreas rurales se halla consolidado una forma productiva tal como se presentó hasta mediados del siglo pasado; el control que hasta esos años realizaba el trabajador rural sobre todas las fases del proceso de producción de alimentos se vio igualmente afectado por la paulatina industrialización

de la agricultura, allí donde el capital comenzó a presionar, ya fuera por medios económicos o de fuerza. La singular violencia antes que representar animadversiones políticas de orden bipartidista, lo que reflejó fue los intereses económicos que beneficiaron al gran capital; en efecto, *“es precisamente durante la época de la Violencia cuando se abre el desarrollo de la agricultura comercial y se forman los focos principales en los departamentos del Valle del Cauca y el Tolima, donde (...) se presentó el mayor número de parcelas perdidas. El crecimiento acelerado, se originó en gran parte por la facilidad que tuvo el capital agrario de acumular tierras mecanizables a muy bajos precios y por la sobreexplotación de grandes masas de campesinos expulsados de sus parcelas”*²².

De esta manera, al irse imponiendo las relaciones capitalistas en el campo se van modificando los espacios rurales, y con ello las formas organizadas de producción y de abastecimiento del mercado a diversas escalas, repercutiendo sobre el proceso agroalimentario, pues la unidad que transforma los alimentos va sustituyendo al agricultor quien se va convirtiendo en una especie de apéndice de la cadena productiva, pasando el control de todo este procedimiento a la agroindustria o a la industria misma, unidades que promovían la extensión de la producción agrícola hacia nuevas áreas en la medida en que el mercado nacional o internacional así lo exigían.

En este contexto, es evidente que los rasgos culturales y socio-económicos de las comunidades rurales, que en muchas áreas se caracterizaban por ser cerradas, se van deteriorando ante la creciente presión que ejercen los procesos tecnificados, para generar excedentes de producción con destino al mercado, ya no solo interno, sino externo. No obstante ello, en otros espacios, reducidos por cierto, se ofrecen resistencias, pues la economía parcelera campesina sigue jugando un papel de trascendencia en la producción nacional de alimentos.

A pesar de dichas resistencias, no coordinadas a nivel nacional, la desterritorialización se va reflejando también en el ámbito urbano, al observar como el mercado en las ciudades se va nutriendo de un mayor número de productos en los que los agricultores no deciden sobre el particular: inicialmente fueron aquellos alimentos que por la tecnificación del agro se producían a gran escala para satisfacer las crecientes necesidades del mercado. Ahora, son productos sobre los

que no ejerce control en ningún aspecto, ni en su selección, al estar ausente los agricultores sobre las decisiones que se deben tomar en torno a la producción, pues es el mercado quien en últimas decide que es lo que se debe cultivar; tampoco en su presentación, debido a la competencia cada vez más exigente que obliga a ser más llamativos en los “empaques” decisión que recae en la agroindustria; ni en la misma calidad de los alimentos, los que de acuerdo con las cualidades intrínsecas son llevados a uno u otro mercado, para satisfacer las necesidades de una población muy fraccionada y cada vez más diferenciada por su nivel de ingresos. Incluso en el momento actual observamos una nueva modalidad: el mercado se ha ido nutriendo cada vez más con un creciente número de conservas de alimentos, con diverso tipo de frutas que anteriormente sólo adquiriríamos frescas, y en cualquier momento; ahora se pueden consumir de “segunda mano”, gracias a los aditivos y preservativos, que las hacen “perfectamente saludables”.

Todos estos cambios que van dejando de lado las decisiones de agricultor en todo lo que anteriormente controlaba, lo va convirtiendo como trabajador del campo en un insumo más de la cadena productiva, que lo va haciendo más ajeno a su propio medio, en donde la tendencia globalizadora impide su realización personal, llevándolo, al desamparo, que con cierta nostalgia de manera retrospectiva, recuerda lo que fue su ámbito socio cultural y económico, que le proporcionaba el medio rural local. El hábitat tradicional de las sociedades rurales cerradas como escenario en el que se desarrollaba su proceso de socialización, se rompe, separándose el ámbito territorial del marco simbólico-cultural. Así pues la desterritorialización se agudiza, no obstante el hecho de que todo tipo de comunidad sea localizable espacialmente, pues cada vez es mayor la pérdida de identidad colectiva e individual.

Bueno es decir que este proceso no es lineal, ni siempre ascendente, pues existen resistencias, y en la comunidades rurales hay sectores, así sean minoritarios, que tienen alternativas a los resultados de la violencia y de la globalización; hacemos referencia a comunidades organizadas de diversas maneras, que ven en sus modelos alternativos, la forma de oponerse al despojo y a la descomposición de sus cosmovisiones del mundo, y que aprovechan las opciones que todavía se pueden mantener en el estrecho marco constitucional. Se trata de la forma como algunas comunidades indígenas afrontan la persecución de los grupos armados ilegales y del Ejército oficial, al desarrollar migraciones internas en sus territorios o dirigiéndose a “lugares

inalcanzables” a sus perseguidores, para luego convertirlos en el escenario para la recuperación de tierras. Esta acción política de algunas etnias ayuda al final a cohesionar y fortalecer al grupo, pues indican formas de resistencia civil ante los atropellos, y señalan que el camino para mantener su cohesión con el territorio y conservar su cultura, no es otro que el de la resistencia organizada de masas.

De hecho la prioridad de este tipo de resistencia la hacen en sus propios resguardos, de esta manera, *“El refugiarse en el interior del propio territorio se apuntala en la clara comprensión que tienen los pueblos indígenas de los altísimos costos sociales, económicos, políticos y culturales que implican la desterritorialización y la desintegración sociocultural, producto de la salida forzada, en últimas el menoscabo progresivo de su sostenibilidad socio política y cultural como pueblos”*²³

Igualmente un ejemplo de lucha por conservar su cohesión, es su grado de organización y resistencia cuando se trata de “rescatar” a sus líderes que en varios casos han sido retenidos por grupos ilegales en el campo, pues la comunidad organizada va hasta el sitio donde los retienen y obligan a sus captores a liberarlos. Por último, es necesario decir que las resistencias no se dan únicamente ante acciones de hecho, sino que son el resultado de su propia concepción de clase, de los indígenas, pues es el grupo étnico que con mejor organización ha enfrentado lo que significa prospectivamente no solo para el país sino para su propia cultura el Tratado de Libre Comercio que discute actualmente los representantes del gobierno con las autoridades estadounidenses, sin consultar con la población colombiana. Asimismo, estará muy cercano el día en que su organización supere los estrechos marcos nacionales y tenga una visión globalizadora internacional.

Sin duda una nueva visión de lo que debe ser el medio rural en el país tendrá que contar con las experiencias y propuestas que este sector social tiene para el desarrollo del campo.

Un problema histórico estructural no resuelto: alternativas al conflicto y transformación rural

Independientemente de nuestra antipatía o simpatía por esta adversidad económica, política y social por la que atraviesa el campo colombiano, el problema del conflicto armado y su consecuente violencia sólo se resolverá cuando exista un compromiso serio de parte del Estado por promover y realizar una profunda reforma democrática e integral de la tenencia de la tierra. Esta medida crucial, desconocida por gran parte del medio académico, es incluso aceptada por importantes personajes de la política tradicional que, de alguna manera, han tenido que ver con la situación actual; el ex ministro de Desarrollo, Ramírez Ocampo, saludaba el hecho de que el gobierno de Pastrana Arango hubiese tenido en cuenta este problema en las conversaciones de paz de la Mesa del Caguán. Ocampo expresó: *“El tema agrario es vital, sin duda. Está bien que el gobierno lo haya puesto en su agenda, porque hace parte casi de la esencia del nacimiento de las FARC. Este es un movimiento profundamente campesino que nace, como su propio líder, de la entraña misma de la tierra en una lucha por reivindicar justicia en la redistribución de la tierra. La plataforma de las FARC en esa materia viene desde 1964 y no ha cambiado. Sigue siendo un tema importantísimo. Porque, primero, hay que reconocer el gran fracaso que ha tenido la reforma agraria como la concebimos en 1961 (...) es un macabro fracaso, de dilapidación, de inutilidad. La realidad hoy en el país es de una reconcentración de la tierra supremamente grave y de las mejores tierras de Colombia”*²⁴

En efecto, según se deduce de uno de los últimos informes estadísticos del IGAC, en el país, a finales de la década pasada, existían 3.471.187 propietarios que tenían 73.997.971 ha de superficie. De éstos, 1.972.544 pequeños propietarios de predios menores de 3 ha, poseían una superficie de 1.301.548 ha., mientras 2.055 superlatifundistas, con predios mayores de 2.000 ha amasaban 38.098.662 ha de superficie. En otras palabras, los pequeños propietarios menores de 3 ha representaban el 58,2% del total y eran dueños del 1,7% de la tierra, mientras que los grandes latifundistas, el 0,06% de los propietarios, concentraban en sus manos el 51,5% del total de la tierra censada. Ante tal exceso de concentración de la tierra, no existe otra salida diferente a la realización de cambios de fondo, aunque no indistintamente, en la situación estructural de la propiedad en el campo.

Esta es una medida crucial por cuanto es la principal bandera de lucha de las FARC, organización cuya esencia y base política y de formación ha sido el campesinado. Ningún gobierno puede desconocer esta reivindicación fundamental de su oponente, si en realidad está en disposición de plantearse una salida perdurable al conflicto, lo que no significa que haya que hacerla a su manera. Sin embargo, sí deben tomarse medidas que conlleven a cambios estructurales, pues la experiencia demuestra que con las tímidas reformas agrarias implementadas por las administraciones en la última mitad del siglo, lo que se ha facilitado es el fortalecimiento del latifundio.

Lo anterior, desde luego, no solo por esta exigencia, sino porque es quizás la única forma que permite contrarrestar la creciente migración del campesino a la ciudad; además, de implementar otras medidas que hagan atractivo el campo. Si el Estado hace décadas renunció a su industrialización y a la creación de una industria nacional competitiva en el mercado internacional, debe centrar su atención ahora a fortalecer el campo, no porque sea la alternativa al desarrollo, sino porque debemos competir, en lo que más sabemos en el mercado internacional: con los productos tropicales, que todavía los países desarrollados no han podido producir. De la misma manera, por cuanto se debe garantizar la seguridad alimentaria de la población colombiana, cada vez más precaria, y más amenazada por las medidas paliativas y no estructurales al tema; por las desiguales condiciones del comercio que acepta el gobierno, y por la persistente crisis agraria nacional.

Se trata, entonces, de realizar cambios profundos en el campo que lo modernicen dejando a un lado su tradicional atraso, que permitan invertir en el medio rural como resultado de las exigencias de los planes de ordenamiento territorial, que analicen las necesidades reales de este sector. Ello significa un desarrollo integral del campo que haga atractiva la vida en este medio, mediante la ejecución de obras de diverso orden, sobre todo vial, de salud, educación.

Pero, también, liberar recursos para todos los sectores productivos, los medianos y grandes propietarios, a quienes se les debe garantizar créditos blandos, a largo plazo y que resulten asequibles para mantener la producción, adquirir la maquinaria indispensable para elevar los

rendimientos agrícolas, incluso participar en el mercado de divisas que genera su comercialización en el mercado externo, independientemente del lugar que ocupen en la fase del proceso productivo, así como garantizar seguros a las cosechas y comprar los productos primarios a precios que estimulen su explotación. Es indispensable promover formas asociativas de productores, no solo para beneficiarse de los procesos de redistribución de la tierra, sino para favorecerse de obras de infraestructura que, por sus limitados recursos no puedan realizar, como adecuación de tierras, creación de sistemas eficientes de riego, nuevas formas de producción de energía, como la eólica, etc. Asimismo, crear instituciones más ágiles y descentralizadas de investigación que garanticen nuevas variedades de semillas, abonos orgánicos, fungicidas y fertilizantes; también medidas de orden formativo que le permita al campesino conocer las ventajas de las cadenas productivas, y participar y posicionarse más claramente en el proceso.

Esto último debe servir de soporte para lograr estimular en el país una verdadera reforma educativa que forme a las gentes del campo en aspectos prioritarios para su propio desarrollo, y no para mantener sistemas educativos ajenos a las realidades de sus pobladores. Una formación que alterne las tareas prácticas de la producción agropecuaria, en su sentido más amplio, y las labores de estudio; que permita realizar actividades teórico-prácticas que redunden en el progreso rural y que contrarresten el ausentismo escolar.

No puede ser ajena la necesidad de promover nuevas visiones sobre el medio rural que permitan analizarlo con otras perspectivas: por ejemplo, aprovechar las ventajas comparativas de muchas regiones para el turismo rural a gran escala. Nuestro país goza de excelentes paisajes, de una de las mayores biodiversidades del mundo, de recursos hídricos suficientes y de unas ventajas climatológicas excelentes que permiten, en áreas muy próximas, contar con climas muy diversos. Simultáneamente, debemos desarrollar políticas que fortalezcan el turismo ecológico, tanto en el interior del país como en nuestros amplios territorios de manglares de tal forma que esta actividad económica sea complementaria a la que tradicionalmente se desarrolla en las costas.

Por último, puede resultar muy fácil enumerar las necesidades crecientes del campo, pero, ¿cuáles deben ser las fuentes claves de financiación de tan complejos proyectos, que requieren grandes volúmenes de recursos? Es indudable que si se piensa en construir la paz como un

proceso duradero, lo primero que se debe garantizar es que por lo menos exista voluntad política real de las partes para consolidar un proceso, que incluya la reducción paulatina del presupuesto militar, hasta alcanzar grados aceptables de gasto, liberando recursos de la guerra para el campo. Esto es posible si existe la exigencia y compromiso de las partes para un cese bilateral de las operaciones militares. La ayuda internacional, especialmente la norteamericana, muy acuciosa en la confrontación, debe exigirse para la paz, para la inversión en el campo, para invertir en la causa estructural de la violencia rural. Debe negociarse con los “países amigos” la moratoria al pago de la deuda externa, pues bien sabemos el peso que estos tienen en el FMI y el Banco Mundial, o la condonación de parte de ésta, para liberar recursos, a la vez que exigir en los convenios bilaterales y multilaterales con los países desarrollados la compra de los productos agropecuarios a precios preferenciales cuando éstos provengan de regiones de paz, donde sus habitantes, con sus organizaciones, se hallan comprometido con el proceso. Este aspecto es básico por cuanto se reconoce que el desvío de importantes sectores campesinos, con sus recursos y espacios territoriales, para los llamados cultivos ilícitos, tiene que ver con la estrechez del mercado interno de nuestros productos agrícolas, muy contrastante con las ventajas que se derivan de la dedicación a estas labores.

A nivel interno, resulta urgente tomar medidas justas que graven, tal como corresponde, la propiedad de la tierra en el campo, a partir de un impuesto de catastro que corresponda a la magnitud de la tierra y las bondades que les son propias; destinar los recursos de las regalías y las explotaciones mineras, en su totalidad, para el campo, sobre el principio de una redistribución justa que beneficie a todo el territorio rural de la nación, independientemente si dichas regiones están favorecidas por la ubicación de los recursos que las generan; ejercer un control real a la corrupción en los municipios y departamentos de los entes administrativos que se benefician actualmente por las regalías; crear zonas de libre inversión que garanticen desarrollar actividades económicas que contribuyan realmente a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las áreas rurales, a fin de generar procesos de reterritorialización, que hagan de nuevo atractivo el campo mediante su revitalización socioeconómica, más allá del poblamiento peri-urbano, generado propiamente por personas que van entrando en la etapa de culminación de su vida activa laboral. Destinar los recursos frescos obtenidos de las nuevas inversiones extranjeras en el medio rural, para mejorar la infraestructura en el campo. Es indudable que si se logra consolidar

en Colombia un proceso de paz que resulte irreversible, la inversión extranjera en el país se multiplicará, debido a las ventajas comparativas que tiene la nación en múltiples órdenes.

Sin lugar a dudas, muchos aspectos se pueden abordar en un tema tan complejo como el que nos agobia desde hace ya medio siglo, pero éstos pueden ser posibles sólo en la medida en que exista el convencimiento de que el conflicto social y armado es real²⁵ y hay que darle una solución negociada en la que se incluya y reconozca igualmente la segunda fuerza insurgente, el ELN, organización que tiene nuevas propuestas de paz, hechas públicas en su Agenda Nacional Alternativa²⁶, sobre la base de generar grandes transformaciones que abran las puertas a construir un nuevo país para nosotros y las nuevas generaciones.

Notas

¹ Departamento Nacional de Planeación (1999) *La Paz: el desafío para el desarrollo*, p.15, TM Editores, Santafé de Bogotá.

² Muy posiblemente comienza a cederse por parte de los paramilitares, quienes desde noviembre de 2002, han hecho manifiesto a la opinión nacional que están dispuestos a realizar conversaciones de paz, partiendo de un *cese de hostilidades*, como uno de los 12 puntos planteados, con lo cual buscan alcanzar una estatus político que les permita negociar con el gobierno actual. Ver la propuesta en El Tiempo, *AUC revelan cartas de paz. La Declaración "PARA"*, noviembre 29, Pág. 1-2, de 2002.

³ Palabras del comandante militar de las FARC, Jorge Briceño, en el momento de intercambio de militares y policías detenidos por guerrilleros enfermos detenidos en las cárceles del país. Este pronunciamiento fue escuchado por la televisión y reproducido por la prensa el 24 de junio de 2001.

⁴ La intromisión norteamericana en el conflicto interno no es nueva, data desde el mismo momento de la creación de las FARC en el año 1964 cuando la agresión directa a Marquetalia, bajo el pretexto de combatir las mal llamadas "repúblicas independientes". El Plan Colombia, su inspiración, y el actual Plan Patriota, con el cual, por enésima vez, los altos mandos colombianos colocan fechas para acabar con el movimiento insurgente, son claras muestras de dicha intromisión; los procesos de paz deben contar con el visto bueno de la administración estadounidense de turno. Su política de intervención directa en los asuntos internos sigue vigente, pues, "el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar la duplicación de sus tropas en Colombia, las cuales pasarán de 400 al 800 y el de contratistas de 400 a 600, así como la inversión al menos de 100 millones de dólares, dirigidos a programas asociados con el "Plan Patriota". Ver El Tiempo, octubre 09 de 2004, Pág. 1-4, Santafé de Bogotá.

⁵ Esto mismo no podemos decir del presidente Uribe, en lo referente a las negociaciones "¿de paz?" con las Autodefensas, pues los paramilitares nunca se han enfrentado contra las instituciones del Estado, sino que su razón de ser obedece a la necesidad de enfrentar a la guerrilla.

⁶ Se trata de la primera experiencia alcanzada con las negociaciones de "cese al fuego, tregua y paz" realizadas con el presidente Belisario Betancur y las negociaciones con el gobierno de Ernesto Samper en Caracas, Tlaxcala – Méjico.

⁷ Ratzel, F. (1898-1899) El territorio, la sociedad y el Estado, págs. 193-203, en: "*Evolución del pensamiento geográfico*", Gómez Mendoza, J., Pág.194, España.

⁸ Salvo muy escasas, pero honrosas excepciones, la cúpula de las fuerzas armadas y mandos medios se han caracterizado por asumir en Colombia, posiciones beligerantes contrarias a cualquier negociación de paz. Ha sido este sector uno de los más activos oponentes a cualquier diálogo con la insurgencia, y cada vez que se ha promovido procesos en esta dirección, han jugado su papel en la desestabilización de las conversaciones, muchas veces de manera abierta y en otras de forma velada.

⁹ Vásquez S, J. y Santana R. L. (2002) Problemas y potencialidades de la agricultura colombiana, Pág. 175, en: *Agricultura y espacio rural en Latinoamérica y España. Posibilidades y riesgos ante la mundialización de la economía*", José A. Segrelles, coordinador. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

¹⁰ Dentro de éstos podemos ubicar los grandes gremios económicos, cuyo "real y verdadero aporte a la paz" se pone al desnudo cada vez que a finales de año se disponen a negociar el alza del salario mínimo. Su mezquindad no les permite desprenderse más allá de un ridículo aumento, que en nada beneficia a más del 50% de los trabajadores colombianos que ganan dicho salario. De verdad que si no son capaces de desprenderse de unos pocos puntos, que permitan incrementar tan menguados ingresos de la clase trabajadora, bien podemos imaginarnos cuál será su posición a la hora de las decisiones de fondo, cuando haya que discutir el problema desde sus raíces, como son las transformaciones que deben darse en la vida nacional.

¹¹ Gutiérrez, R. (2004) Alternativas para la paz: perspectivas de los empresarios, Pág. 67, en: *Alternativas a la guerra. Iniciativas y procesos de paz en Colombia* Controversia, febrero, Accord – CINEP, Londres – Bogotá.

¹² Estudio del Fondo para la Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), el Centro para la Política Internacional (CIP) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en: "*Un riguroso estudio norteamericano revela que Latinoamérica es para EEUU un asunto militar y no político*", Rebelión Octubre 11 de 2004, Pág. Web Rebelión Org.com.

¹³ Rangel Suárez, A., *El Ajedrez de la guerra. El juego de las Farc*, en: El Tiempo, Pág.1-15, 8 de noviembre de 2002. Santafé de Bogotá.

¹⁴ Rojas, R. (2002) *Las verdaderas intenciones de los paramilitares*, Santafé de Bogotá.

¹⁵ León, J. (2002) La metamorfosis de las AUC, Pág. 58, en *Revista Semana, edición especial Colombia y el mundo en el 2002*, edición No 1.077-1.078, diciembre 23 de 2002 a enero 6 de 2003, Santafé de Bogotá.

¹⁶ Ver La oferta gubernamental y la carta del Comando Central, El Tiempo, 12 de septiembre de 2004, pág. 1-8

¹⁷ Vásquez S. J. (2002) Sobre este aspecto y otros que muestran sus nuevas dinámicas, ver “*El ordenamiento territorial y el proceso de paz en Colombia*”, Revista Comercio Exterior, Págs. 170-183, febrero de 2002, volumen 52, número 2, México

¹⁸ Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, pág. 21, Santafé de Bogotá.

¹⁹ El Codhes es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, organización no gubernamental que se encarga de estudiar de una manera sistematizada el creciente fenómeno de los desplazados en el país. Esta entidad hace público sus estudios mediante el boletín “*Codhes Informa*”, y apoya la publicación de diversas investigaciones sobre el particular.

²⁰ Una de las múltiples denuncias sobre estos vínculos se puede reseñar así, en palabras del sociólogo Alfredo Molano: “*El gobierno se defiende diciendo que los paramilitares no están bajo el mando de los militares, que tienen una estructura absolutamente independiente y una base social propia. Es verdad. Los paramilitares no obedecen a la fuerza pública, pero ésta los rodea de garantías para que sus acciones sean exitosas. La Fiscalía se queja constantemente de que las órdenes de captura que emite son ejecutadas sólo parcialmente, los detenidos se escapan de las cárceles y los combates contra las autodefensas son la excepción. La queja de las comunidades es siempre la misma: los paramilitares actúan protegidos por los militares. El resultado es claro: mientras en los años ochentas las Fuerzas Armadas estaban acusadas del 70% de los atropellos contra la población civil, hoy esta cifra está en la cabeza de los paramilitares. La división del trabajo entre estas fuerzas no necesita unidad de mando sino una cierta coordinación realizada por individuos y que no compromete el nombre de la institución*”. Molano, A. (2001) *La paz en su laberinto*, Pág. 98. En: *¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis*. El Áncora Editores, Santafé de Bogotá.

²¹ Prada, G. y Míeles González, E. (2004) *Caso Colombia: situación alimentaria de la población rural desplazada reasentada en ámbitos urbanos*. Codhes, Santafé de Bogotá.

²² Siabato Pinto, T. (1986), “perspectivas de la economía campesina”, en *Problemas agrarios colombianos*, CEGA y Siglo XXI, Bogotá, pp. 393-394.

²³ Suárez Morales, H. D y Henao Arcila, D. F. (2002) *El desplazamiento forzado indígena en Colombia, La ley del Silencio y la Tristeza*.

²⁴ Ramírez O., A. (1999) “La reforma agraria ha sido un macabro fracaso”, *Tiempos del Mundo*, Santafé de Bogotá, 21-27 de enero de 1999.

²⁵ La falta de voluntad política del Gobierno de Uribe para realizar negociaciones de paz con el movimiento insurgente, se reflejan claramente en la reciente intervención de su negociador de paz, el médico Luis Carlos Restrepo, quien en el simposio *Esfuerzos por la paz y la democracia*, propiciado por FESCOL, manifestó que “(en Colombia) no existe conflicto social y armado, porque en el país hay cauces democráticos para hacer las reclamaciones de este orden. Ni tampoco existe conflicto interno, porque sería aceptar una guerra cuando lo que hay es una amenaza terrorista de grupos que se lucran del secuestro y el narcotráfico y someten a sus autoridades locales” ver *El Tiempo*, *Debate sobre si hay o no conflicto en el país*, Págs. 1-4, octubre 14 de 2004.

²⁶ La Agenda muestra temas nuevos en la propuesta de negociación de este grupo, “contempla entre otros temas, la solución política al conflicto armado, la alternatividad penal, la crisis social, la crisis humanitaria, la aplicación de políticas neoliberales y de soberanía nacional”. Ver UNPeriódico “*ELN: ¿negociación con una guerrilla derrotada?*”, Bogotá DC. Junio 20 de 2004, Pág. 7